



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**SALA DE DECISIÓN LABORAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA**

Seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2.025)

<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Radicado Único:</b>	<b>54001-3105-003-2016-00132-01</b>
<b>Radicado Interno:</b>	21.559
<b>Demandante:</b>	HECTOR MOISES SÁNCHEZ BARÓN
<b>Demandado:</b>	JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA y Otro
<b>Llamado en Garantía:</b>	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA

**MAGISTRADA PONENTE:**  
**NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES**

Procede la Sala dentro del proceso ordinario laboral previamente referenciado, a conocer el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la parte demandante HECTOR MOISES SÁNCHEZ BARÓN respecto de la sentencia proferida el 14 de enero de 2025, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**1. ANTECEDENTES**

El señor HECTOR MOISES SÁNCHEZ BARÓN, por intermedio de apoderada judicial interpuso demanda ordinaria laboral contra JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA como empleador e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO, en calidad de responsable solidario, solicitando que se declarara la existencia de un contrato verbal de obra o labor contratada, desde el día 15 de octubre de 2014, el cual fue suspendido por ocasión de un accidente laboral sobre el cual no hubo reporte, y que continúa vigente debido a su condición de debilidad manifiesta y la falta de autorización del Ministerio de Trabajo para su terminación.

Solicita se condene por: a) salarios desde el 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2015, b) prestaciones sociales y vacaciones desde el 15 de octubre de 2014 hasta el 11 de abril de 2016, c) la indemnización moratoria por no pago oportuno de las prestaciones sociales, d) aportes a seguridad social integral, e) indexación, f) reintegro al empleo, g) intereses moratorios, h) gastos para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, i) un emolumento por la pérdida del ojo derecho, j) indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Expuso como fundamento fáctico de sus pretensiones:

- Que el ingeniero IMAR ORLANDO VACCA MACHADO se ganó con el SENA una licitación para realizar contrato de obra 968 de 2014, por lo que contactó al maestro JOSE ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA para que le trabajara, quien a su vez contactó al demandante para el mismo fin, lo que aceptó, iniciando labores como obrero el día 15 de octubre de 2014, obedeciendo ordenes de BARRIOS CASTAÑEDA, mediante horario impuesto de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 pm y de 1:00 p.a. a 5:00 p.m., aunque los sábados era de medio día; que como contraprestación recibía un salario mensual de \$800.000.

- Que el 19 de noviembre de 2014, mientras realizaba labores de picado de piso sufrió un accidente laboral al impactarle una esquirla de cerámica en su ojo izquierdo, al llegar a su casa experimentó un dolor intenso y pérdida de visión, por lo que, se trasladó al puesto de salud de La Libertad, donde le indicaron que debía acudir al Hospital Erasmo Meoz debido a la ausencia de servicio de oftalmología; que para ser atendido se le sugirió describir el accidente como una caída de piedra.
- Que el oftalmólogo José Tobías Rojas determinó que requería cirugía urgente, pero, esta solo pudo ser realizada el 26 de noviembre de 2014 debido a la ocupación de la sala de cirugía; tras la intervención inicial, como tenía salud subsidiada, se le remitió a la Clínica San Diego, donde fue operado por la doctora Silvia Flórez, el 3 de diciembre de 2014 y se le dio incapacidad hasta el 29 de marzo de 2015, sin embargo, su tratamiento se vio afectado cuando el ingeniero IRMAR VACCA lo afilió a Coomeva, impidiendo el seguimiento médico con la doctora Flórez. Posteriormente, el ingeniero VACCA financió una consulta en la Clínica Peñaranda, donde el médico Jairo Peñaranda confirmó la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo.
- Que recibió pagos por parte de BARRIOS CASTAÑEDA, quien le entregó un total de \$2.700.000 entre noviembre y diciembre de 2014, y en enero de 2015, fue IRMAR VACCA quien comenzó a reconocerle un salario mínimo y medicina, pero suspendió los pagos el 17 de septiembre de 2015, tras haberle cancelado \$5.976.000.
- Que, al sentirse desprotegido acudió a la Defensoría del Pueblo, obteniendo representación legal y promoviendo una acción de tutela ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, en donde, la tutela protegió sus derechos fundamentales a la salud, el trabajo, el mínimo vital y la dignidad humana, generando la reanudación parcial de pagos por parte de VACCA.
- Que por el accidente se le suspendieron sus labores y adquirió el estatus de trabajador en estado de debilidad manifiesta, por lo que el contrato continua vigente, además no hubo un reporte de dicho accidente, él no se encontraba afiliado a riesgos laborales y al no haberse solicitado autorización del Ministerio de Trabajo para terminar el contrato, se deben reconocer sus acreencias laborales.

El demandado **JOSE ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA** en su oportunidad legal contestó la demanda aceptando que el Ingeniero IMAR ORLANDO VACCA lo contactó para ofrecerle que trabajara como maestro de obra, desarrollando actividades relacionadas con la ejecución del objeto del contrato No. 968 del 15 de octubre de 2014, suscrito entre el SENA como contratante y el ingeniero como contratista; que el pago era quincenal, cancelado en la oficina del ingeniero o por medio del interventor; sobre de los demás hechos señaló que no son ciertos o no le constan. Indicó que se opone a las pretensiones del demandante, argumentando que no encuentran respaldo en la realidad de los hechos. Señaló que el ingeniero IMAR VACCA MACHADO fungió desde el inicio como contratista independiente y verdadero empleador del personal que ocupó y que destinó por su cuenta y riesgo para la ejecución de la obra, específicamente del demandante, por lo tanto, en tal sentido debe responder, por lo tanto, él carece de legitimación por pasiva para ser llamado a responder en el presente proceso. Expone respecto a la solidaridad, que el contratista independiente es el ingeniero IMAR VACCA y el beneficiario o dueño de la obra es el SENA como contratante. Formuló las excepciones de mérito de: Inexistencia de responsabilidad laboral de las obligaciones demandadas, con respecto al demandado señor JOSE ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA, falta de legitimación por pasiva y la innominada o genérica. Igualmente realizó llamamiento en garantía a la COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA, argumentando que el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones están amparados a través de la Póliza 33 GU025573 vigente desde el 16-10-2014 hasta el 16-04-2017 y los de responsabilidad civil extracontractual con la Póliza 33 RED001352 a favor de entidades estatales, las cuales resultan vigentes para la época de los hechos y hasta la fecha.

Mediante Auto del 08 de febrero de 2017 se ordenó dar aplicación a lo indicado en el parágrafo del artículo 30 del C.P.L., toda vez que se estructuraban los presupuestos allí consagrados, respecto del señor IMAR ORLANDO VACCA, por no haber sido posible su notificación, y así continuar el proceso únicamente en contra del señor JOSE ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA. Así mismo, se reconoció personería a la apoderada del demandado BARRIOS CASTAÑEDA y se admitió la contestación a la demanda que presentó.

Por medio de Auto del 30 de marzo de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Laboral de Cúcuta, admitió llamamiento en garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORAS DE FINANZAS CONFIANZA, entidad que en su oportunidad legal contestó la demanda indicando que no le constaban los hechos y aclaró que no tenía vínculo legal o contractual con el demandante; se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones, argumentando desconocimiento de los fundamentos fácticos. Frente al llamamiento señaló que los hechos no le constan; se opuso a las pretensiones argumentando que no debe ser condenada a pagar o a reembolsar suma alguna, porque entre el llamante en garantía y la llamada en garantía no existe relación contractual alguna, así como tampoco existe legitimación en la causa para vincularse; manifestó que expidió dos pólizas, en virtud de las cuales se le llamó en garantía, sin embargo, amparan eventos completamente divergentes, que la Póliza NO. 01 33GU025573-garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales y la Póliza No. 01 R0020229-póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual entidades estatales. Planteó las excepciones de: Ausencia de cobertura de la póliza 33 re001352, falta de legitimación en la causa del codemandado JOSE ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA para llamar en garantía a la aseguradora CONFIANZA S.A. en virtud de las pólizas, máximo valor asegurado, prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y la improcedencia de la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T. SS.

En audiencia del 20 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Laboral de Cúcuta, se pronunció sobre el amparo de pobreza solicitado por el actor y lo concedió, y teniendo en cuenta que este revocó poder a la apoderada inicial y que su segundo apoderado renunció sin que a la fecha hubiera otorgado poder a otro apoderado, se le designo uno nuevo le designó en la forma prevista para los curadores ad litem, quien fue relevado posteriormente.

Por Auto del 18 de marzo de 2024, se relevó del cargo de Curador ad litem al doctor LEONEL ANDRES NIÑO PEÑARANDA, y en su lugar se designó al doctor BRESLYN FERNANDO CARRILLO GAMBOA, quien aceptó.

## **2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

### **2.1. Identificación del Tema de Decisión**

La Sala se pronuncia en Grado Jurisdiccional de Consulta sobre la sentencia proferida el 14 de enero de 2025 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

**“PRIMERO: DECLARAR PROBADAS** las excepciones de **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD LABORAL DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, propuestas por el demandado **JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA**, y en consecuencia **ABSOLVERLO** de las pretensiones incoadas en su contra por **HÉCTOR MOISÉS SÁNCHEZ BARÓN**, por lo analizado en la parte motiva.

**SEGUNDO: DECLARAR PROBADA** la excepción de **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL CODEMANDADO JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA PARA LLAMAR EN GARANTÍA A LA ASEGURADORA**, propuesta por **CONFIANZA**, conforme se señaló en las consideraciones.

**TERCERO: SIN COSTAS** en esta instancia.”

### **2.2. Fundamento de la Decisión.**

La jueza a quo fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

Que se demandó como verdadero empleador a José Armando Barrios Castañeda y por auto del 8 de febrero de 2017, se declaró la contumacia respecto del otro demandado que era llamado en solidaridad, por lo tanto, corresponde verificar solamente si el contrato se dio con el demandado mencionado y si prosperan las pretensiones incoadas en su contra. Que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta en auto proferido en partida 19854 del 6 de julio de 2022, definió que si se concluye que la demanda es la verdadera empleadora del demandante, como se plantea en el libelo, nada impedirá que se profieran las condenas a las que haya lugar, toda vez que el fallo involucrará a las partes necesarias. Por lo que se considera ajustado el auto proferido y no existe inconveniente en continuar con el trámite de este proceso ni tampoco con dictar sentencia para definir la responsabilidad de José Armando Barrios Castañeda y la llamada en garantía.

Que jurisprudencialmente se exige que se demuestre la prestación personal del servicio para dar aplicación a la presunción del artículo 24 del C.S.T., lo que puede ser desvirtuado, carga que se invierte en cabeza del alegado empleador, como se indicó en la SL 362 de 2018. Que la SL 16110 de 2015 recordó que, con la sola presunción del artículo señalado, el demandante no queda relevado de otras cargas probatorias, pues también debe acreditar los extremos temporales de la relación, monto de salario, jornada laboral, trabajo suplementario, el hecho del despido a instancia del empleador si demanda la indemnización por despido injusto, entre otros, conforme a lo que está en el artículo 167 del C.G.P.

Citó la Sentencia de radicado 39065 de 2010, reiterada en SL 2129 de 2024, resaltando que resulta fundamental evidenciar la prestación personal del servicio y que ella sea a favor del beneficiario citado a juicio, para que se encamine como viable la reclamación de un contrato de trabajo contra una persona determinada, carga que no se cumplió por el promotor del juicio conforme el artículo 167, puesto que además de la presunción de certeza que recayó sobre la contestación dada frente a los hechos 1, 5 y 7, por la inasistencia a la audiencia de conciliación en la que el demandado negó enfáticamente haber contratado o ser el empleador del actor, la prueba documental no contiene ninguna evidencia con la que se le puede atribuir esa calidad y este tampoco realizó confesión alguna en ese sentido en el interrogatorio de parte; adicionalmente, la declaración rendida por el testigo Domingo Niño Díaz, permitió establecer que no era el demandado, sino otras personas las que impartían el pago de la remuneración, suministraban los elementos material de trabajo y contrataban al personal.

Que, por lo tanto, no existe base para aplicar la presunción del artículo 24 del C.S.T y se procede a absolver al demandado de las pretensiones incoadas en su contra, al encontrar demostradas la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de responsabilidad laboral de las obligaciones demandadas.

Que como indicó Confianza en una de sus excepciones, al haberse asegurado con las pólizas a personas diferentes al señor Barrios Castañeda, no podía este realizar el llamamiento, ya que para siniestrarlas se requería que el asegurado resultara condenado, lo que no ocurre en este evento, por lo que prospera la segunda excepción propuesta por el llamado en garantía.

Que, con ocasión del amparo de pobreza otorgado al demandante, no se le condena en costas y tampoco se condena al demandado por haber llamado en garantía a CONFIANZA, porque cuando esa solicitud se realizó y se admitió, aún no se había declarado la contumacia respecto de quien fuera el llamado en solidaridad y quién era uno de los asegurados por las pólizas.

### **3. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA**

Como la sentencia fue adversa a todas las pretensiones del demandante HECTOR MOISES SÁNCHEZ BARÓN, se conocerá el Grado Jurisdiccional de Consulta de esta, en virtud de lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado en artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

#### **4. ALEGATOS**

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, se presentaron los siguientes alegatos de conclusión:

**PARTE DEMANDADA:** El abogado de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, solicita que se confirme la sentencia absolutoria de primera instancia; subsidiariamente, que, si se impone condena, se respete lo estipulado en las condiciones generales y particulares de las pólizas.

Argumenta que esa aseguradora fue llamada en garantía por el demandado, pero no tiene vínculo contractual ni legal con él y que no existe relación directa entre la aseguradora y los hechos o pretensiones de la demanda. También indica la ausencia de cobertura material de la póliza No. GU025573, pues cubre únicamente obligaciones del tomador Imar Orlando Vacca Machado frente al SENA Regional Norte de Santander y José Armando Barrios Castañeda no es tomador ni afianzado en dicha póliza. Señala la inexistencia de relación laboral entre el demandante y Vacca Machado. Ya que no se probó la existencia de un contrato de trabajo conforme al artículo 23 del C.S.T. y no se demostró subordinación, prestación personal del servicio ni pago de salario. Resalta que no existe responsabilidad solidaria (artículo 34 C.S.T.) porque no hay identidad entre el objeto social del SENA y las labores del contratista, además la labor del demandante (ayudante de construcción) no guarda relación con la actividad educativa del SENA. Que no se materializó el riesgo asegurado porque no se probó incumplimiento del contrato afianzado ni el perjuicio patrimonial al SENA, por lo que no se cumplen los requisitos para activar la cobertura de la póliza. Finalmente expone la falta de cobertura de la póliza No. RE001352, porque cubre daños a terceros, no obligaciones laborales.

#### **5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO**

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

#### **6. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER:**

Los problemas jurídicos propuestos a consideración de esta Sala son los siguientes:

¿Se encuentra acreditada la existencia de un contrato de trabajo realidad entre el señor HECTOR MOISES SÁNCHEZ BARÓN, como trabajador y JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA, como empleador? De ser así, se procederá a establecer si son procedentes las pretensiones condenatorias solicitadas por el demandante.

De igual modo, de prosperar el problema jurídico principal se deberá estudiar ¿Si CONFIANZA S.A. debe responder en solidaridad como llamado en garantía por las condenas impuestas a JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA?

#### **7. CONSIDERACIONES:**

En este caso, procede la Sala a determinar, si existió una relación laboral entre el señor HECTOR MOISES SÁNCHEZ BARÓN, como trabajador y JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA, como empleador, desde el día 15 de octubre de 2014, que fue suspendida el 19 de noviembre de 2014 por ocasión del accidente del accidente laboral. En consecuencia, se procederá a establecer si son procedentes las pretensiones condenatorias solicitadas por el demandante.

La jueza *a quo* determinó que no existe base para aplicar la presunción del artículo 24 del C.S.T, por lo que se absuelve al demandado al encontrar demostradas la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de responsabilidad laboral de las obligaciones demandadas, y como las pólizas aseguraban a personas diferentes al señor BARRIOS CASTAÑEDA, no podía realizar el llamamiento por lo que prospera la segunda excepción propuesta por el llamado en garantía.

De tal forma procede la Sala de Decisión a analizar si en efecto existió entre las partes una relación laboral constituida por un contrato de trabajo; para lo cual se recuerda, que en términos del artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, contrato

de trabajo es aquél por el cual, una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Ante ello, acorde al artículo 23 (ibidem), para que se predique su existencia debe existir **una actividad personal realizada por el mismo trabajador, bajo la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, y, una remuneración o salario.**

Es importante señalar, que la teoría general de la carga de la prueba establece, que le corresponde probar las obligaciones o su extinción al que alegue aquellas o éstas (Art. 1757 C.C), principio que se reproduce en otros términos en el artículo 167 del C.G.P. al determinar que “...*incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*”.

Ahora bien, el artículo 24 del C.S.T., subrogado por el artículo 2° de la Ley 50 de 1990, enseña que “...**Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo**”, pues una vez reunidos los tres elementos anteriores, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, no obstante, esta presunción admite prueba en contrario.

Esta presunción legal opera a favor del trabajador y, por consiguiente, demostrada la prestación del servicio, es a cargo del empleador desvirtuarla. Así lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en diferentes oportunidades, entre estas en la Sentencia de 13 de diciembre de 1996, donde precisa, que el artículo 24 no consagra un derecho sino una regla de juicio que afecta la carga de la prueba en el proceso laboral, esto es, se trata de una instrucción a los jueces laborales, **relevando al trabajador de acreditar el elemento de la subordinación pues esta se presume** y toda prestación de una actividad personal a favor de otra persona, natural o jurídica, debe entenderse en principio como laboral a menos que el empleador desvirtúe que hubo dependencia.

Se extrae de lo expuesto, que probada la prestación personal del servicio, la subordinación se presume y compete ejercer plena actividad probatoria a la parte demandada que excepciona la inexistencia del contrato de trabajo; complementando esta teoría, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-20683 de 6 de diciembre de 2017, radicación No. 56.313, en lo referente al principio de la primacía de la realidad y la presunción del artículo 24 del Código sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, reitera lo ya expuesto y concreta que **quien se abroga la calidad de trabajador debe demostrar al menos dos aspectos: la prestación personal del servicio y los extremos temporales en que afirma haberlo desarrollado**, con los elementos de juicio suficientes para convencer al Juez y al tiempo permitir que el demandado tenga información suficiente para ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contradicción, siendo a partir de estas reglas que el juez debe aplicar las respectivas consecuencias jurídicas a la parte que omite su deber procesal.

Lo anterior significa, que **a la parte actora le basta tanto con probar la prestación o la actividad personal como el período en que ejecutó la actividad, para que se presuma el contrato de trabajo** y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.

Entre los principios que orientan el Derecho Procesal Colombiano, es de recibo el de la necesidad de la prueba, el cual está contemplado en el artículo 164 del C.G.P., que a su letra dice: “...*Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho*”. A la vez hace lo suyo en materia laboral, el artículo 60 de C.P.T.S.S. que expresa: “(...) *El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas a tiempo*”. Seguidamente el artículo 61 del C.P.T.S.S. reza que: “...*El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la 8 crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (...)*”. Esto, en consonancia con el artículo 167 del C.G.P.

Con el fin de resolver los problemas jurídicos antes expuesto, la Sala observa que dentro del expediente las siguientes pruebas:

- Historia Clínica, a nombre de Héctor Moisés Sánchez Barón (Págs. 05-10, 36-58, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).
- Solicitud elevada ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, del 07 de marzo de 2016, accionante HECTOR MOISES SANCHEZ BARON, accionado IMAR ORLANDO VACCA MACHADO (Págs. 11-12, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).
- Incidente de desacato radicado ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, del 07 de marzo de 2016, accionante HECTOR MOISES SANCHEZ BARON, accionado IMAR ORLANDO VACCA MACHADO (Pág. 13, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).
- Recibos de pago de parte del Ingeniero IMAR ORLANDO VACCA MACHADO identificado con cédula de ciudadanía 88.279.674, por la suma de \$689.455, del 08 de febrero de 2016 y de \$1.200.000 del 07 de marzo de 2016 (Págs. 14-15, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).
- Certificado de Existencia y Representación Legal de BARRIOS CASTAÑEDA JOSE ARMANDO, fecha expedición 07 de abril de 2016, último año renovado del 2015, con actividad principal CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES (Pag 16-18, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital)
- Fallo de acción de tutela conocida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, del 04 de febrero de 2016, accionante HECTOR MOISES SANCHEZ BARON, accionado IMAR ORLANDO VACCA MACHADO y otros:

**PRIMERO:** Modifíquese el ordinal segundo del fallo del once (11) de Diciembre de dos mil Quince (2015) proferido por el Juez Primero Administrativo Oral de Cúcuta, el

HECTOR MOISES SANCHEZ BARON, así como también que se continúe cancelando el salario a (sic) mínimo legal o las incapacidades respectivas, desde el momento en que dejó de hacerlo, debiendo en lo sucesivo cancelarlo dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, hasta que la justicia ordinaria laboral decida definitivamente, sobre las pretensiones de reintegro, indemnizaciones y demás deprecadas por el actor.

**SEGUNDO:** Confírmese en lo restante el fallo del once (11) de Diciembre de dos mil Quince (2015) proferido por el Juez Primero Administrativo Oral de Cúcuta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

(Pág. 35, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).

- Acción de Tutela de Juzgado Primero Administrativo Oral de Cúcuta, del 11 de diciembre de 2015, accionante HECTOR MOISES SANCHEZ BARON, accionado JOSE ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA y Otros, en donde se falló:

**FALLA**

**PRIMERO:** TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y mínimo vital del señor HECTOR MOISES SANCHEZ BARÓN, identificado con C.C. No. 1.090.474.571, por lo dicho en los considerandos.

**SEGUNDO:** ORDÉNASE al Ingeniero IMAR ORLANDO VACCA MACHADO, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación o comunicación de la presente tutela, reintegre al joven

HECTOR MOISÉS SÁNCHEZ BARÓN, al cargo que venía desarrollando antes de su accidente, lo afilie a una EPS, así como también que le continúe cancelando el salario a mínimo legal o las incapacidades respectivas, desde el momento en que dejó de hacerlo, debiendo en lo sucesivo cancelarlas dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, hasta que la justicia ordinaria laboral decida definitivamente, sobre las pretensiones de reintegro, indemnizaciones y demás deprecadas por el actor.

**TERCERO: INSTÉSE** al señor HECTOR MOISÉS SÁNCHEZ BARÓN, para que en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, inicie el correspondiente proceso ordinario ante los jueces laborales del circuito de Cúcuta o el que sea competente, con el fin de que se pronuncien de manera definitiva sobre sus derechos, so pena de que pierda vigencia la orden tutelar descrita en el numeral anterior.

**CUARTO: REQUIÉRASE** a los señores IMAR VACCA MACHADO, para que tan pronto como venza el plazo precitado allegue con destino a este trámite, constancia del cumplimiento de la orden impartida so pena de desacato, y al actor, para que una vez venzan los cuatro (4) meses antes aludidos, acredite ante el despacho, el cumplimiento de la obligación que se le impone de demandar ante la jurisdicción ordinaria laboral o de lo contrario perderá vigencia la orden tutelar dispensada en contra del señor VACCA MACHADO y así se comunicará.

**QUINTO: DESVINCÚLESE** al SENA y al señor ARMANDO BARRIOS, por lo dicho en los considerandos.

**SEXTO:** De conformidad con lo normado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, **NOTIFIQUESE**, por el medio más expedito, este fallo a las partes, al señor Defensor del Pueblo, a la señora Procuradora 98 Judicial I Administrativo que actúa como Agente del Ministerio Público ante este Despacho y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para los fines del artículo 610 del C.G.P.

**SÉPTIMO:** En caso de no ser impugnada esta sentencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, **ENVIASE** para su eventual revisión a la Honorable Corte Constitucional. Si es excluida de la revisión, **ARCHIVASE** el expediente, previas las anotaciones secretariales del caso.

*(Pág. 260 Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).*

- Contrato No 968 de 2014, del 15 de octubre de 2014, suscrito entre el SENA y el Ingeniero Civil IMAR ORLANDO VACCA MACHADO, como contratista, en donde se estipuló:

**AGOSTO de 2014. CLÁUSULA SEPTIMA:- Obligaciones del Contratista:** En general, son obligaciones del contratista, los siguientes: El contratista seleccionado deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones, aportando los documentos vigentes al momento de la ejecución del contrato (certificado de alturas avanzado de los trabajadores que estarán dentro del proceso de ejecución de la obra vigentes, y demás documentos requeridos por el supervisor del contrato para garantizar la plena ejecución) 2) Ejecutar las obras objeto del contrato en perfectas condiciones y dentro de los plazos pactados los cuales deben ser recibidos a satisfacción por el supervisor que designe del SENA. 3) Suministrar en cantidad y calidad como en tiempo, el personal y equipo de herramienta, y todos los elementos necesarios para la ejecución de las obras. 4) Realizar el transporte de materiales y equipos que se requieran para la ejecución del objeto contractual a celebrarse. 5) Presentar al supervisor el informe de avance de obra en el momento que la Entidad contratante lo solicite. 6) Realizar y presentar al Supervisor del contrato registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 7) Suscribir y presentar conjuntamente con el Supervisor, Acta de inicio, actas parciales, final de obra y liquidación, las cuales serán elaboradas por el supervisor designado. 8) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros. 9) Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago del contrato a celebrarse. 10) Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la ejecución del contrato a celebrarse. 11) Toda actividad ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad por causa de materiales o mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA seleccionado bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o la Entidad Contratante. 12) Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto mantenimiento y adecuación objeto del presente contrato, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato. Debe firmarse por el supervisor del contrato designado y contratista, adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad Contratante. 13) Soportar la ejecución de las obras a través facturas de acuerdo al servicio de mantenimiento y/o adecuación objeto del contrato a celebrarse. 14) Poner en conocimiento del SENA cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación. 15) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de las obras que se requieren. 16) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta. 17) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atención de sus obligaciones. 18) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el SENA, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución. 19) Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. 20) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la obra contratada. 21) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 22) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que **EL CONTRATISTA** haya de emplear para la ejecución del presente contrato. 23) Presentar factura detallando los servicios de mantenimiento, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar. 24) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria. 25) Poner en conocimiento del SENA cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación. 26) Disponer de una línea de teléfono fijo, una línea celular y un correo electrónico para comunicación exclusiva con el SENA, por el plazo de ejecución del contrato. 27) Comunicar oportunamente al SENA cuando el saldo del contrato se encuentre en el veinte por ciento (20%) de su apropiación. 28) Presentar informe mensual en medio magnético (Excel), al supervisor del contrato, en el que se detalle una relación de las facturas y los funcionarios que han recibido estas entregas. 29) Certificar la afiliación del personal que destine para la ejecución del contrato al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes. 30) El contratista deberá tener afiliado, desde el inicio del contrato y permanentemente, el personal que destinará a la prestación del servicio, conforme lo establece la Ley de Seguridad Social y el Régimen Laboral: a) Entidad Promotora de Salud. b) Administradora de Fondo de Pensiones. c) Administradora de Riesgos Profesionales ARP. d) Fondo de Cesantías. e) Caja de Compensación Familiar. f) Adicionalmente tener implementado Programa de Salud Ocupacional. 30) Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. **CLÁUSULA**



*(Pag 69-76, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).*

- Resolución No 847 de 2014 por el cual adjudica el proceso de selección abreviada menor cuantía *(Págs. 78-83, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital)*
- Resolución No 968 de 2014 suscrito entre el SENA y el Ingeniero Civil IMAR ORLANDO VACCA MACHADO, contratista, acta de inicio, acta final, acta de liquidación, invitación pública, *(Págs. 91-109, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital).*
- Estudio previo de necesidad para determinar la conveniencia y oportunidad para contratación, acta de inicio, acta de aprobación de garantía, acta de pago parcial, planilla aportes a seguridad social, contrato de obra No 966 de 2014, informes, acta de recibo final, acta de liquidación bilateral, *(Págs. 167-236, Pdf001, 01Instancia; del expediente digital)*
- Testimonio rendido por Domingo Niño Díaz, asomado por el demandado que relata su experiencia en la obra de demolición realizada en las instalaciones del Sena, explicando que trabajaba en la misma labor que el demandante, picando el piso con barras y que ambos recibían una remuneración de \$400.000 quincenales, mientras que los oficiales percibían \$600.000. Señala que los obreros recibían instrucciones de una arquitecta, quien actuaba como interventora de la obra, bajo la supervisión del ingeniero Ímar Orlando Vaca Machado, responsable de la ejecución del contrato y que los pagos eran realizados por la secretaria del ingeniero en su oficina ubicada en la calle 12. Recuerda que el incidente en el que Sánchez Barón sufrió una lesión en su ojo izquierdo fue porque el demandante no utilizó las gafas de protección pese a que se le recomendó hacerlo y en un momento, una esquirla de material golpeó su ojo, causándole dolor inmediato y que Pedro García, otro trabajador de la obra, le indicó que se dirigiera a su casa para luego acudir al puesto de salud de La Libertad, donde recibió atención médica antes de ser remitido al hospital.
- Interrogatorio de Parte rendido por José Armando Barrios Castañeda, en calidad de demandado, donde afirma que no tenía ninguna relación contractual con Sánchez Barón. Cuenta que, al saber que se requerían más obreros en la obra, le sugirió al demandante que se dirigiera al ingeniero Vacca Machado, quien finalmente lo vinculó al proyecto. Explica que él mismo trabajaba como oficial de obra, sin funciones de dirección sobre el personal y que los pagos a los trabajadores eran efectuados por la secretaria del ingeniero Vacca Machado, agrega que los materiales de construcción eran suministrados por la interventoría. Narra que no estuvo presente en el momento en que ocurrió el accidente del demandante, pues había salido un instante de la obra, pero que, al regresar se enteró de la lesión y de su traslado al puesto de salud. Confirma que, tras el incidente el demandante no regresó a laborar.

Conforme a esta relación probatoria, reitera la Sala, que para la existencia de la presunción de que trata el artículo 24 del C.S.T., la parte actora debió acreditar la prestación personal del servicio, y los extremos temporales en los que afirma haberlo desarrollado, para de esa forma trasladar a la demandada la carga de la prueba de que no existió subordinación; al respecto de la valoración probatoria, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL21157-2017, Radicación n.º 55951 y con M.P. ERNESTO FORERO VARGAS, se refiere las facultades del juez recordando que:

*“no están sometidos a la tarifa legal, como quiera que atendiendo los mandatos previstos en el artículo 61 del CPTSS, ostentan la facultad legal de apreciar libremente los medios de prueba y así formar de manera libre su convencimiento, atendiendo, eso sí, el principio de la sana crítica, lo que conlleva a que sus conclusiones, mientras no sean descabelladas, queden amparadas por la presunción de legalidad y acierto (...) las decisiones se deben fundamentar en los elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico”*

En consecuencia, procede la Sala a valorar las pruebas obrantes en el proceso para determinar si se encuentran corroborados los requisitos esenciales para que opera la presunción del contrato de trabajo contenida en el artículo 24 del C.S.T en favor del actor; en virtud de lo cual, se destaca que no existe en el plenario ni un solo medio de prueba documental del cual se pueda desprender, así sea de forma aproximada la prestación personal del servicio o los extremos temporales en los cuales se haya podido desarrollar la relación de trabajo entre las partes, ya que ninguno de los documentos aportados da cuenta de ello, puesto que todos apuntan a que el contratista era el ingeniero ÍMAR ORLANDO VACCA MACHADO, quien fue excluido de la litis y que además la administración de la obra y el pago de salarios estaban a cargo del anterior.

Sobre la forma de valorar testimonios, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia SL1229 de 2022 explica:

*“Respecto de la forma en que debe valorarse la prueba testimonial, los Códigos General del Proceso y Procesal del Trabajo establecen dos reglas en particular: el primero de ellos, en el artículo 221.3, le impone al juez el deber de interrogar a la persona sobre **«la razón de la ciencia de su dicho»** con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído, o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance». Y el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo resalta que, recabados todos los medios de prueba (incluidos los testimonios), el juez debe analizarlos en conjunto y definir si con ellos es posible llegar al convencimiento de los hechos ocurridos. Todo esto «inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes».*

*Uno de los fines de estas reglas probatorias es el de **lograr que los hechos narrados por un testigo y las circunstancias en que ocurrieron, lleguen al conocimiento del juez de la manera más fiel a cómo acontecieron en la realidad** y por tanto, impedir que, por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración como la del testigo de oídas, se distorsione esa realidad, puesto que, es evidente que el relato de los hechos que realizará esta clase de declarante, no se referirá a supuestos fácticos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera directa, sino a través de referencia o transmisión que otro hubiere tenido sobre los mismos hechos. Dicho en términos sencillos, un testigo de oídas es aquel que narra lo que otra persona le relata sobre unos hechos y, por lo tanto, lo que puede acreditar, en últimas, es solo la existencia de ese relato.”*

Aunado a lo anterior, se tiene que del testimonio de Domingo Niño Díaz se desprende que trabajó junto con Sánchez Barón en la obra de demolición y que a su vez identificó al ingeniero ÍMAR ORLANDO VACCA MACHADO como el responsable de la contratación y pago del personal, así como que el demandante sufrió un accidente en el ojo izquierdo por no usar gafas de protección, pero no atribuyó responsabilidad alguna a BARRIOS CASTAÑEDA, afirmando que este solo daba indicaciones propias de un oficial de obra. A su narrativa puede atribuirse características de credibilidad, a partir del análisis de elementos como la coherencia y consistencia con los hechos relatados por el demandado, además refuerza la tesis de que no existía relación de subordinación ni contrato de trabajo entre SÁNCHEZ BARÓN y BARRIOS CASTAÑEDA.

La Sala advierte que la única prueba restante de la cual se podría tener certeza sobre la prestación personal del servicio es el interrogatorio al interrogatorio de parte rendido por JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA, no obstante, no se evidencia en ninguna de sus manifestaciones que haya mencionado algún hecho susceptible de confesión.

En ausencia de otro medio de prueba al respecto, es dable concluir, que no existe evidencia suficiente sobre la prestación personal del servicio por parte del actor en favor del demandado, razón por la cual le asistió razón a la jueza a quo al declarar probadas las excepciones de inexistencia de responsabilidad laboral de las

obligaciones demandadas y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por el demandado JOSÉ ARMANDO BARRIOS CASTAÑEDA.  
De igual forma fue acertada la decisión respecto a la falta de legitimación en la causa del codemandado para llamar en garantía a la aseguradora, pues en las dos pólizas allegadas al proceso por CONFIANZA (N° 33 RE001352 y 33GU025573), no se observa que aparezca como tomador, asegurado o beneficiario el aquí demandado, por lo que no existe una relación jurídica entre el llamante y llamado en garantía, que le permitiera al primero exigir a este último el cumplimiento de una obligación.

La Sala recuerda que toda decisión judicial debe estar debidamente fundada a través de la inescindible relación entre los elementos fácticos con el material probatorio que genere la suficiente persuasión de credibilidad para que se configuren y resulten aplicables los presupuestos normativos que persigue el actor. Significa lo anterior que, dentro del expediente no se desprenden probanzas suficientes sobre lo expresado en el escrito progenitor que soporten plenamente los supuesto de hecho que pretende hacer valer el demandante, y por ser a éste a quien le corresponde la carga de la prueba, tal y como prevé el artículo 167 del C.G.P., se confirmará la decisión objeto del grado jurisdiccional de consulta que no accedió a las pretensiones y en consecuencia se relevará del estudio de la procedencia de las declaratorias y condenas contenidas en el escrito de demanda.

Finalmente, no se condenará en costas en esta instancia, en atención al grado jurisdiccional de consulta.

**DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:**

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la Sentencia del 14 de enero de 2025, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva.

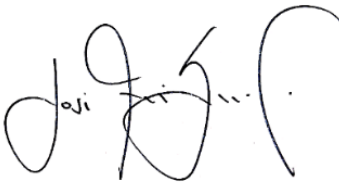
**SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS**, por surtirse el Grado Jurisdiccional de Consulta.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE**



**NIDIAM BELÉM QUINTERO GELVES**  
**MAGISTRADA PONENTE**



**JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA**  
**Magistrado**



**DAVID A.J. CORREA STEER**  
**Magistrado**